

Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	<b>DECLARATIVO – RESPONSABILIDAD CIVIL</b>
Radicado	<b>05001 31 03 014 2023 00201 01</b>
Demandante	<b>JONATHAN HENAO LÓPEZ</b>
Demandado	<b>CARLOS MARIO PULGARÍN CUARTAS Y OTROS</b>
Juzgado origen	<b>CATORCE CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN</b>

Se decide la apelación interpuesta contra el ordinal cuarto del auto del 27 de julio de 2023, mediante el cual se negó el decreto de algunas medidas cautelares solicitadas por el actor.

## 1. ANTECEDENTES

El demandante instauró demanda declarativa en contra de los demandados, con el objeto de que se declare la responsabilidad civil de los mismos y se condenen al pago de perjuicios, la cual fue admitida por auto del 27 de julio del año en curso, se decretó la medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda respecto de establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad demandada y se negó las correspondientes a embargo y secuestro, por no ajustarse a las disposiciones del Art. 590 del C.G.P, negativa que fue recurrida en reposición y apelación por la parte actora.

## 2. LOS RECURSOS

Para fundamentar los recursos, el demandante indicó que la medida cautelar busca garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución que comprometen la tutela jurisdiccional efectiva, el reconocimiento del derecho al debido proceso y acceder a la administración de justicia para lograr la materialización de los derechos sustanciales que, a su juicio, fueron conculcados con la decisión de negar las medidas cautelares solicitadas.

En su sentir, se desconoció que en la litis están participando en calidad de demandados personas naturales y se direccionaban solicitudes específicas hacia ellos en el marco del Artículo 590. Numeral 1 y literal C, aclarando que el decreto cautelar no presupone que el derecho sustantivo sea cierto, basta que sea creíble, aparente y que, por eso la medida se adopta bajo la responsabilidad de la parte que la solicita, a la cual, por regla, se le exige que previamente preste una caución que fue aportada y resultó costosa. Consideró que la negativa es una carga excesiva que impide materializar el proceso, a pesar de la apariencia de buen derecho.

Resaltó que la mora judicial representa un peligro y daño que sirve de fundamento complementario a muchas medidas cautelares, principalmente a las de tipo personal, en específico para la solicitud decretar medidas cautelares de embargo de salario y demás, pues se busca precaver la demora judicial y, el eventual daño que podría generar mantener la situación jurídica cuestionada sin una medida que garantice el objeto del proceso.

Agregó que las normas sobre medidas cautelares han sido diseñadas de modo tal, que los jueces no tengan que hacer un examen sobre la sospecha de eludir el pago por parte del demandado y, por eso, en el Código General del Proceso mantiene la presunción y que, en ciertas hipótesis, el juez debe reparar en dicho fundamento, como en el caso de las medidas cautelares discrecionales, porque su decreto demanda un análisis de la necesidad de la medida. Por tales razones solicitó revocar la decisión recurrida y, en su lugar, acceder a las cautelas.

Por auto del 25 de agosto de 2023, el juzgado de origen no repuso la decisión, por considerar que, el recurrente pasa por alto que, en los procesos declarativos, y particularmente, en aquellos donde se persigue el pago de perjuicios originados en responsabilidad civil, como atañe al proceso, atendiendo al artículo 590 del CGP, se puede solicitar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado.

Estimó que las medidas de embargos de salarios, honorarios y cuentas bancarias no encasillan en el literal c) del Art 590 del C.G.P., ya que las mismas se encuentran reguladas en varios apartes normativos del C.G.P, de allí que, en estricto sensu el embargo no podía considerarse una medida innominada, pues se dispone su procedencia para este tipo de procesos, cuando haya fallo favorable de primera instancia y que, con la inscripción de la demanda decretada sobre los establecimientos de comercio de propiedad de la demandada COLOMBIA INNOVATION GROUP. S.AS., se cumple a cabalidad con el cometido, a tono con lo establecido en el artículo 593 del CGP.

Añadió que, si en gracia de discusión se aceptara la medida de embargo solicitada en el proceso declarativo corresponden a medidas innominadas, es facultativo del juez decretar una cautela menos gravosa, pues de trata de un proceso declarativo donde el derecho reclamado entra en discusión y no existe con la admisión de la demanda la apariencia de buen derecho, necesidad y proporcionalidad requerida, motivos por los cuales decidió mantener

incólume la decisión, concedió la alzada y remitió el expediente a esta Corporación para su resolución.

### 3. CONSIDERACIONES

#### 3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra autos procede solamente en contra de aquellos que la misma norma relaciona o que precisan disposiciones especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado, concretamente, en el numeral 8.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

#### 3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Le corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se cumplen los presupuestos legales para decretar la medida cautelar pretendida y en consecuencia es procedente revocar la decisión rebatida.

#### 3.3 CASO EN CONCRETO

El CGP consagra las medidas cautelares como el mecanismo judicial dispuesto para la *"protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión"*<sup>1</sup>. Con tal propósito y sin ser limitativo, este cuerpo normativo consagra cautelas para garantizar el cumplimiento de la sentencia<sup>2</sup>, el pago de las obligaciones ejecutadas<sup>3</sup>, el pago de los perjuicios reclamados<sup>4</sup> y asegurar los bienes objeto del proceso<sup>5</sup>. Es tal la relevancia de las medidas cautelares para procurar la efectividad de los derechos y materializar las decisiones judiciales, que el mismo estatuto prevé prioridad en su decreto<sup>6</sup> y práctica<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 590 literal c)

<sup>2</sup> Artículo 384.

<sup>3</sup> Artículos 397 (alimentos), 597-3, 599 y 602.

<sup>4</sup> Artículo 590 literal b).

<sup>5</sup> Artículo 476.

<sup>6</sup> Artículo 588.

<sup>7</sup> Artículo 298.

Para los procesos declarativos el artículo 590 del CGP dispuso una serie de reglas que rigen las medidas cautelares, y estableció en su numeral 1 que desde la presentación de la demanda se podrá decretar la inscripción de esta en dos eventos:

*"a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes. (...)*

*b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.*

*(...) c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.*

*Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.*

*Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada (...)"*

Para el suscrito, resulta claro para que el decreto de medidas cautelares consistente en el embargo de salarios, prestaciones sociales, honorarios, comisiones y otras, solicitadas por la parte actora no es procedente.

En efecto, el embargo de bienes de propiedad del demandado es una medida que se encuentra regulada en el CGP para los procesos de ejecución que, por su naturaleza y expresa disposición legal conciben el embargo y secuestro como una medida que le es propia, cuyo objeto es garantizar con los bienes del deudor el pago de la obligación, así como el embargo de bienes afectados con una inscripción de la demanda cuando el proceso declarativo cuente finalmente con sentencia favorable al demandante. Ello es así porque en ambos eventos existe certeza del derecho que se reclama al estar ante una obligación clara, expresa y exigible, pero el embargo no resulta

procedente en la etapa del juicio de admisibilidad del proceso declarativo, pues así no está concebido en el ordenamiento procesal.

La medida cautelar que procede para asuntos de responsabilidad civil en la modalidad contractual y extracontractual, a tono con lo dispuesto en el literal a del artículo 590 del CGP corresponde indefectiblemente a la inscripción de la demanda.

La medida que se denomina "*innominada*" a la que alude el literal c del artículo 590 del CGP alude a otras medidas cautelares que el juez encuentre razonable para blindar de efectividad la pretensión declarativa, no así la cautela del embargo, pues no se cuenta con la existencia de un derecho cierto en cabeza del demandante, quien tiene solo una mera expectativa frente a la decisión de fondo y la demanda es una mera probabilidad de futura ocurrencia.

Al margen de lo anterior, se encuentra que en el caso particular, el *a quo* decretó la inscripción de la demanda respecto de dos establecimientos de comercio de la sociedad Colombia Innovation Group S.A.S. demandada en la causa, circunstancia que derruye la necesidad y proporcionalidad que exige la medida cautelar innominada, sin que la negativa de las cautelares reclamadas constituya vulneración de las garantías procesales como alegó el recurrente, puesto que, precisamente obedece al apego a la normatividad que rige el proceso judicial. Motivos suficientes para confirmar la decisión censurada, sin imposición de costas por no haberse causado.


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

#### **4. RESUELVE.**

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, sin condena en costas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al Juzgado de origen para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE



JULIO NÉSTOR ECHEVERRY ARIAS  
Magistrado